



NUE 155-A-2019 (SP)

**Burgos Viale contra Presidencia de la República**  
**Resolución definitiva**

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las nueve horas con once minutos del siete de febrero de dos mil veinte.

**1. Descripción del caso:**

I. El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **José Roberto Burgos Viale** (en adelante el apelante), en contra de la resolución de referencia 194-2019, emitida por el Oficial de Información de la **Presidencia de la República (PR)**, quien solicitó la información consistente en:

*1. Nombre oficial de los organismos de inteligencia que en la actualidad dependen del Presidente de la República por formar parte del órgano ejecutivo.*

*2. Copia del organigrama vigente del Organismo de Inteligencia del Estado OIE.*

*3. Detalle de las funciones a cargo de la Unidad de Análisis Económico que forma parte del OIE.*

*4. Nombre de los consultores contratados por la Unidad de Análisis Económico del OIE y detalle de los pagos asignados a los mismos en concepto de honorarios profesionales.*

En ese orden, el Oficial de Información de la **Presidencia de la República** resolvió, en relación al requerimiento 1, que en el ámbito de competencias atribuidas a la Presidencia de La República, en su condición de ente obligado por la LAIP, el único organismo de inteligencia que forma parte de esta institución es el Organismo de Inteligencia del Estado, de conformidad con el artículo 4 de la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado (LOIE), el cual establece: “[e]l Organismo de Inteligencia del Estado estará bajo la autoridad y conducción del Presidente de la República, quien deberá mantenerlo institucional y presupuestariamente, determinando además sus políticas y líneas de acción”; y respecto de



los puntos 2, 3 y 4 del requerimiento, de conformidad con el Art. 72 literal a) de la LAIP, le informó que dicha información se encontraba protegida por la declaratoria de reserva de las quince horas del veinte de noviembre de dos mil quince, suscrita por el Jefe del Organismo de Inteligencia del Estado, mediante la cual se reservó la información relacionada a las dependencias administrativas que conforman el OIE, las actividades administrativas y operativas que se desempeñan y los fondos de su financiamiento y su correspondiente gasto; por lo que en cumplimiento del Art. 72, inciso segundo LAIP, transcribió los pasajes atinentes a la motivación de la reserva antes referida (los cuales serán considerados posteriormente, en el apartado 2: “Análisis del Caso”, de la presente resolución).

Al respecto, el apelante manifestó que la resolución emitida no es congruente con los precedentes administrativos y jurisprudenciales que recientemente se han referido al tema de acceso a la información pública y transparencia del OIE. A la vez, se inhibe el cumplimiento del principio de rendición de cuentas que el mismo Art. 4 de la LAIP contempla, de forma que se permita el escrutinio ciudadano, sobre aquellas materias de tipo administrativo a cargo del mencionado organismo de inteligencia del estado y que en ningún momento pone en riesgo su eficacia operativa, la seguridad nacional o los derechos humanos de terceros.

Asimismo, señaló que: “en la resolución objeto de la apelación, el oficial se limita a transcribir una reserva genérica de información, que se prórroga por períodos de siete años, cada vez que se incluye nueva información relacionada con el OIE en el expediente que, para tales efectos, se supone que mantiene la PR; no justificándose como ya lo ha ordenado este Instituto, las reservas que se imponen a los requerimientos de información de los ciudadanos y mucho menos aportándose prueba del examen o ponderación realizados para denegar el acceso a los datos solicitados”.

**II.** El Instituto admitió la apelación y designó al entonces comisionado René Eduardo Cárcamo para instruir el procedimiento y elaborar el proyecto de resolución; sin embargo, tras su renuncia al cargo, el caso fue reasignado a la Comisionada Presidenta en Funciones **Silvia Cristina Pérez Sánchez**.

En el informe justificativo de ley, suscrito por José Ángel Pérez Chacón y Hans Alexander Morales Ruíz, en su calidad de apoderados especiales del Presidente de la



República, expusieron en lo medular, que la respuesta emitida por el entonces Oficial de Información de la **PR** respecto de la calidad de información reservada que ostenta lo requerido por el apelante, cumple los requisitos de legalidad, razonabilidad y temporalidad que deben ser considerados para declarar una reserva, desarrollados en diferentes antecedentes emitidos por el IAIP; y en tal sentido, ratificaron la declaratoria de reserva emitida a las quince horas del veinte de noviembre de dos mil quince, suscrita por el Jefe del Organismo de Inteligencia del Estado, acerca de la información relacionada a las dependencias administrativas que conforman el OIE, las actividades administrativas y operativas que se desempeñan y los fondos de su financiamiento y su correspondiente gasto.

Finalizada la etapa de instrucción, se realizó la audiencia oral en la fecha y hora señalada, con la comparecencia del apelante **Burgos Viale** y los apoderados del ente obligado. En dicha actuación, las partes no alegaron la existencia de algún incidente que impidiera la realización de la audiencia.

En la etapa de **ofrecimiento de prueba**, el apelante ofertó lo siguiente: “copia simple de nota periodística de El Diario de Hoy, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil uno”; la cual fue rechazada por el Pleno de este Instituto por no ser pertinente ni útil para el presente caso.

Posteriormente, los apoderados de la **PR** ofertaron como prueba los siguientes documentos: 1) copia simple de la Declaratoria de Reserva de información de las quince horas del veinte de noviembre de dos mil quince, denominada: Organismo de Inteligencia del Estado; 2) copia simple de la resolución definitiva NUE 71-A-2015, emitida por este Instituto en el caso Burgos Viale contra la Presidencia de la República; 3) fotocopia simple de la estructura organizativa de la Presidencia de la República, siendo pertinente y útil para demostrar la veracidad de respuesta emitida por el Oficial de Información para el requerimiento número 1; 4) copia simple de la sentencia de las nueve horas con cuarenta y un minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, pronunciada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); 5) copia simple de la Ley 11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia de España, ofrecida como fuente de derecho comparado. Luego de haber deliberado, el Pleno decidió admitir como prueba pertinente, útil y conducente al caso, la documentación descrita en los numerales 1, 3 y 5, en virtud de los



artículos 318 y 319 del Código Procesal Civil y Mercantil; y rechazar la relativa a los numerales 2 y 4, por lo que dicha documentación rechazada no fue incorporada al expediente.

Ya en la etapa de **alegatos**, el apelante expuso en lo medular: a) que considera que los supuestos materiales y jurisprudenciales han cambiado como para mantener en reserva una parte de la estructura organizativa del OIE, porque existe un pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, en el amparo 636-2014, donde sentó nuevos precedentes, relativo al objeto de controversia; b) que el dato o denominador común que ha cambiado desde el 2015 a la fecha, es que no toda la información de la OIE es reservada, confidencial o secreta, ya que los ciudadanos tienen derecho a ejercer contraloría sobre ciertos aspectos que tienen que ver sobre el uso de recursos públicos por parte del OIE siempre y cuando no se comprometan la seguridad ni la defensa nacional del país; c) que en lo relativo a su primer requerimiento, cita la página 24 del amparo 636-2014: “se advierte que el OIE no es la única institución que recaba información para ser utilizada con fines de inteligencia debido a sus campos de acción. Las instituciones especializadas en servicios de inteligencia como el OIE, deben mantener comunicación y coordinación con la policía, el ejército, cancillería y demás instituciones relacionadas con las áreas de seguridad, defensa y acción exterior”; además, que en la página 7 del informe de ley rendido por el ente obligado se hace alusión a la existencia de un “sistema de inteligencia”; es decir, que se confirma la existencia de la información que está solicitando en tanto existen otros entes que realizan inteligencia; d) que los parámetros que este Instituto ha dado para justificar la reserva de la información pública con base al Art. 19 de la LAIP, no se están cumpliendo por parte de la Presidencia de la República, porque si se presta atención a la reserva que se ha dictado con referencia al OIE, establece que todo lo relacionado al expediente administrativo del OIE, se va a considerar información reservada, por lo que la reserva es genérica en primer lugar, y en segundo lugar, porque se señala claramente en dicha reserva que todos los documentos que se vayan generando, relacionados con el OIE van a alimentar el expediente del mismo y van a quedar reservados para siete años; es decir, que no solo quedó reservado lo que en 2015 vino a controvertir ante este Instituto, sino que además los documentos que vayan surgiendo y vayan alimentando el expediente administrativo, pues cada documento ira quedando secreto para siete años, sin mayor justificación, sin intervención de otra autoridad, lo cual constituye un riesgo, tal como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso

Grijalva contra Guatemala, conocido como el caso del diario militar: Se establece ahí que la existencia del secreto de Estado no solo puede facilitar la violación de derechos humanos, sino que también permite la impunidad, y que no puede quedar a criterio de una sola autoridad, que al ser información existente, secreta o no, tiene que haber intervención ya sea de los ciudadanos o de un ente contralor como lo es este Instituto; e) que se debe tener en cuenta que si bien al Presidente de la República se le asesora por medio del OIE, a los ciudadanos se les debe rendir cuentas; f) que el organigrama que solicitó en su momento, ya fue revelado a la Sala de lo Constitucional de la CSJ, en el amparo 636-2014, página 31 de ese documento, en el cual se desarrolla claramente las áreas en que el OIE se conforma. Finalmente, reiteró el contenido de su solicitud de acceso a la información pública y los argumentos de su recurso de apelación. Finalmente, la parte apelante pidió al Pleno, que determine el límite o parámetros de reserva de la información que administra y genera la Presidencia en lo relativo a la OIE.

Por su parte, los apoderados del ente obligado alegaron en lo medular: a) que sus argumentos versarán sobre los puntos que ya fueron mencionados en su informe de defensa; b) que conoce el precedente referencia 636-2014 emitido por la Sala de lo Constitucional de la CSJ, pero que, en relación al primer requerimiento, la petición del apelante fue estrictamente conocer el nombre oficial de los organismos de inteligencia del Estado, y el único en el país es el OIE (formalmente y legalmente); c) que la Cn y la LOIE ya lo denominan así, lo cual lo convierte en un hecho notorio; d) en referencia a los otros 3 puntos, el apelante hace referencia a aspectos de contraloría ciudadana y uso de recursos públicos, pero que la misma sentencia 636-2014 menciona que los ciudadanos pueden ejercer dicho control respecto de ámbitos no sujetos a reserva ni documentación no clasificada; misma línea que ha retomado este Instituto en los precedentes 196-A-2018 y 71-A-2015, que hacen referencia a la contraloría ciudadana respecto del gasto público; entonces, al leer los requerimientos 2, 3 y 4, ninguno de ellos tiene que ver con el gasto público, y considera que conocer el funcionamiento interno de dicho organismo no es de interés público; e) que en la resolución emitida por este Instituto en el caso 71-A-2015, sirvió de base para la declaratoria de reserva objeto del presente procedimiento; f) que no está de acuerdo con el apelante cuando menciona que las circunstancias actuales han cambiado en lo relativo a mantener la reserva en mención, pues esta debe ser entendida en los términos de la LAIP y no de la LOIE,



pues no es cierto que nada de dicho expediente no se pueda conocer; g) que el OIE a diferencia de otras instituciones, el tema de la reserva y actividades que realiza, por su misma naturaleza, tienen el carácter de confidencial, pues estamos hablando de un organismo que su labor esencial es informar y asesorar al Presidente de la República en materia de inteligencia; y, h) que en relación a conocer nombre de los consultores, si bien estos no son empleados públicos, la misma Sala de lo Constitucional, en el caso ya citado, protegió la identidad de los demandantes, dicha protección de su identidad obedece al Art. 8 de la LOIE y su Reglamento. Entonces, independientemente de su tipo de contratación, estas tienen conocimiento del funcionamiento y estructura interna del OIE, lo cual pone en riesgo la labor de dicho organismo y la vida de estos consultores. Finalmente solicitó se ratifique la resolución venida en apelación, la reserva de los ítems 2, 3 y 4, y que se confirme lo relativo al punto 1.

Por último, el apelante señaló que su solicitud radica al tiempo presente. Asimismo, la PR mencionó que el organismo de inteligencia oficial por ley es el OIE; y que si bien la Sala de lo Constitucional reconoce que existen otras instituciones que realizan labores de inteligencia, pero que esa no fue la petición concreta del ciudadano apelante. Finalmente, expusieron que las unidades del OIE así como cualquier otra institución, realizan un trabajo concatenado, por lo que, revelar la información de dicha unidad está relacionada con los rubros y áreas de operación de dicho organismo.

## ***2. Análisis del caso***

El asunto medular consiste en determinar si la negativa de entregar la información requerida ha sido debidamente fundamentada, así como establecer la obligación de entregarla o no. Para tal efecto, conviene realizar un análisis puntual respecto de: (I) Los efectos del principio de máxima publicidad y sus limitantes; (II) análisis del caso entorno a la valoración de la prueba aportada y examen sobre el cumplimiento de requisitos de la declaratoria de reserva, y, (III) determinación de la naturaleza de la información y la posible obligación de entregarla, según precedente.

I. El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como un principio rector del derecho a buscar, recibir

y difundir información contenido en el artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”<sup>1</sup>. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”<sup>2</sup>.

El Art. 4 letra “a” de la LAIP establece que el principio de máxima publicidad como rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones. En ese orden de ideas, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la Corte IDH, se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”<sup>3</sup>.

También, se puede interpretar que los tres efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes obligados<sup>4</sup>, son que: a) el derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción<sup>5</sup>; b) la carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al

<sup>1</sup> Corte I.D.H., *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151, párr. 93; Corte I.D.H., *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*, Sentencia de 24 de noviembre de 2010, Serie C No. 219, Párr. 230.

<sup>2</sup> CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08), *Principios sobre el derecho de acceso a la información*, 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: [http://www.oas.org/cji/CJI-RES\\_147\\_LXXIII-O-08.p](http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXIII-O-08.p)

<sup>3</sup> CIDH- *Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil*, Sentencia de 24 de noviembre de 2010, Serie C, N° 219, párrafo 230.

<sup>4</sup> El Art. 7 de la LAIP, contiene quiénes son los entes obligados a la mencionada ley.

<sup>5</sup> Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición, 2012.



órgano que fue solicitada<sup>6</sup>; y c) preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación<sup>7</sup>.

En relación a las limitaciones al DAIP se ha pronunciado la “Declaración Conjunta de 2004, de los relatores para la libertad de expresión”, en la que se efectuó una formulación sintética de los requisitos que deben cumplir las limitaciones al derecho de acceso a la información: Que “el derecho de acceso a la información deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones cuidadosamente adaptado para proteger los intereses públicos y privados preponderantes, incluida la privacidad”, que **“las excepciones se aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información”**, y que “la autoridad pública que procure denegar el acceso debe demostrar que la información está amparada por el sistema de excepciones”<sup>8</sup>.

Uno de los límites a este derecho es la **información reservada**, la cual se define como aquella información pública cuyo acceso se restringe de manera expresa de conformidad con la LAIP—específicamente en el Art. 19 de la LAIP—, en razón de un interés general durante un periodo determinado y por causas justificadas —Art. 6 letra “e” de la LAIP—.

El titular del ente obligado es el encargado de clasificar la información tomando en cuenta la legalidad, temporalidad y razonabilidad del porqué se decide excluir temporalmente la información; una vez ha concluido el plazo de reserva, la información vuelve a ser pública y por lo tanto puede ser solicitada por cualquier persona en virtud del DAIP. Es importante señalar que **las causales establecidas en el Art. 19 de la LAIP son taxativas** y no pueden invocarse otras que no estén señaladas en la ley.

II. En ese sentido, corresponde al ente obligado demostrar de manera fehaciente la aplicación de cualquiera de las causas de restricción al derecho de acceso a la información y

---

<sup>6</sup> Idem

<sup>7</sup> Idem

<sup>8</sup> Declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión (2004). Disponible en: [http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos\\_basicos/declaraciones.asp](http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp)



el inminente daño que provocaría revelar la información que se trata de restringir por existir riesgos reales sobre el o los bienes jurídicos que se pretende proteger de conformidad con el Art. 21 letra “c” de la LAIP. En ese contexto, la negativa de entregar información generada, administrada o que tiene en su poder la **PR** en relación al funcionamiento del OIE, será válida si se fundamenta en las excepciones establecidas en la LAIP.

1. Entonces, para el caso en comento, el ente obligado denegó la información relativa a los ítems 2, 3 y 4, alegando que la misma se encuentra reservada de conformidad a la declaratoria de reserva de las quince horas del 20 de noviembre de 2015, emitida por el Jefe del OIE (según consta a folios 9-10 del expediente administrativo, ref. 194-2019). Por lo que, a efecto de acreditar su postura, el ente obligado incorporó – durante la audiencia oral – la siguiente documentación: a) copia simple de la Declaratoria de Reserva de Información de las quince horas del veinte de noviembre de dos mil quince, denominada: Organismo de Inteligencia del Estado; b) fotocopia simple de la estructura organizativa de la Presidencia de la República, siendo pertinente y útil para demostrar la veracidad de respuesta emitida por el Oficial de Información para el requerimiento número 1; y, c) copia simple de la Ley 11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia de España, ofrecida como fuente de derecho comparado.

Bajo ese orden, con base en los elementos de prueba presentados y valorados conjuntamente conforme a la sana crítica, se tienen por establecidos los siguientes hechos: a) Que la declaratoria de reserva emitida el 20 de noviembre del año 2015 fue la base que sirvió de sustento al entonces Oficial de Información de la **PR** para denegar la información solicitada por el apelante, la cual es el objeto de controversia en el presente procedimiento, siendo un acto administrativo que declara la reserva del: *“expediente administrativo denominado “Organismo de Inteligencia del Estado”, con base en el Art. 19 letra “b” de la LAIP, el cual contiene información de “las dependencias administrativas que conforman el OIE, las actividades administrativas y operativas que se desempeñan y los fondos de su financiamiento y su correspondiente gasto”*; cuyo plazo es de 7 años contados a partir de la incorporación de la documentación de que se trate al expediente administrativo en mención; b) que dicha declaratoria de reserva nace a raíz del pronunciamiento de este Instituto en la resolución definitiva en el caso de referencia NUE 71-A-2015; c) que en la copia simple de



la estructura organizativa de la **PR**, únicamente aparece como organismo de inteligencia, el denominado “Organismo de Inteligencia del Estado”; d) que según la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (de España), en su Art. 5, las actividades, organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, es información clasificada.

Ahora bien, es conveniente realizar un análisis de los hechos comprobados con lo establecido en la LAIP en su Art. 19 para declarar la reserva de la información. El artículo 6 de la LAIP literal “e” menciona que se entenderá por información reservada “...*aquella información pública cuyo acceso se restringe de manera expresa de conformidad con esta ley, en razón de un interés general durante un período determinado y por causas justificadas*” (la negrita es propia). De dicha definición se puede establecer que para que una información pueda ser reservada de conformidad con la ley, esta debe ser expresamente mencionada en la declaratoria de reserva, no dando lugar a dudas respecto a qué tipo de información no se publicará y en qué período de tiempo.

Expuesto lo anterior, corresponde analizar la información solicitada por los apelantes a la luz de la LAIP y verificar el argumento de la **PR** respecto a la clasificación de la información de conformidad a la causal del Art. 19 letra “b” de la LAIP, invocada en la declaratoria de reserva antes mencionada. En ese sentido, es pertinente hacer referencia brevemente a dicha causal:

*b. La que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública*

Los términos de defensa nacional y seguridad pública son amplios y pueden ser interpretados de varias formas, por lo que tanto debe ser cuidadosa su aplicación, para evitar que se niegue injustificadamente por esta causa.

De acuerdo al Art. 4 numeral 2º de la Ley de la Defensa Nacional (LDN), la defensa nacional: “Es el conjunto de recursos y actividades que en forma coordinada desarrolla el Estado permanentemente en todos los campos de acción, para hacer frente a una amenaza a la soberanía nacional y la integridad del territorio”. Es decir, la defensa nacional implica el conjunto de recursos y estrategias encaminadas a enfrentar las amenazas derivadas de

posibles agresiones de otros Estados. Esta función la tiene la Fuerza Armada bajo el mando del Presidente de la República.

En cambio, la seguridad pública es una función de la Policía Nacional Civil (PNC) que se desarrolla bajo la conducción del Presidente de la República. Es concebida como un derecho constitucional de las personas, de vivir en un ambiente de armonía y respeto. La seguridad pública también es un servicio que presta el Estado para proteger la integridad física de las personas, prevenir, combatir y reprimir los actos delictivos, y en general, mantener el orden público. Los casos en que se invoque la defensa nacional o la seguridad pública para denegar información pública deben argumentar, documentar y demostrar fehacientemente que la divulgación de la información pone en riesgo o provoca un daño en estas funciones.

2. Ahora bien, este Instituto ha sostenido reiteradamente que para la validez de una declaración de reserva se necesita la concurrencia de tres caracteres o requisitos: (a) legalidad, (b) razonabilidad y (c) temporalidad, y que ante la ausencia de uno de ellos debe desclasificarse la información.

(a) **Legalidad.** La facultad que tienen las autoridades para reservar cierta información debe enmarcarse en el ordenamiento legal vigente, a fin de garantizar que los límites al ejercicio del DAIP estén dirigidos a la protección de otros derechos de idéntica o superior importancia.

(b) **Razonabilidad.** Es necesario que se razone y fundamente la adopción de esta limitación, pues con ello se busca reducir la arbitrariedad en las actuaciones de los funcionarios con potestad para declarar la clasificación de la información pública como reservada. En esencia, no basta con enunciar los motivos que conllevan al ente obligado a declarar la reserva, sino que tales argumentos deben ser jurídicamente válidos, en la medida que no se establezca un límite arbitrario al DAIP.

(c) **Temporalidad.** Se refiere a que la restricción del acceso a la información debe estar sujeta a un plazo definido, establecido en el Arts. 20 de la LAIP y 31 letra "f" de la RELAI; y es que, si no se establece el plazo de reserva podría vulnerarse el DAIP de las



personas, al generar incertidumbre sobre el momento en que la información estará a su disposición.

Entonces, para determinar el cumplimiento o existencia de estos tres requisitos, contamos con la “Declaratoria de reserva del expediente administrativo denominado “Organismo de Inteligencia del Estado”<sup>9</sup>, emitida el 20 de noviembre de 2015, incorporado como prueba por el ente obligado; de la cual se realiza (para el presente caso) el análisis siguiente:

(a) Para que un ente obligado pueda reservar la información pública se debe analizar respecto al marco legal vigente, esto para garantizar que los límites al ejercicio de este derecho estén dirigidos a la protección de otros derechos de idéntica o superior importancia; es decir, que la información solicitada encuadra en alguna de las causales de excepción al acceso a la información prevista en el artículo 19 de la LAIP.

En cuanto a la **legalidad**, la declaratoria de reserva emitida en el año 2015 dispone que la información es reservada con base al Art. 19 letra “b” de la LAIP; es decir, “la que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública”. La **PR** ratificó dicha postura tanto en la resolución de información ref. 194-2019 como en el informe de ley rendido por el ente obligado.

Otro de los aspectos necesarios a tomar en cuenta en la legalidad es que la declaratoria de reserva sea emitida por el servidor público competente para ello. El art. 21 de la LAIP; 17, 27, 28 y 31 de su Reglamento (RELAIP) establecen que la declaratoria debe ser emitida ya sea por el titular del ente obligado o aquel a quien se delegue. En el caso en comento la declaratoria fue emitida por Edgar Lizama Rivera, quien fue designado y facultado por el Presidente de la República de ese entonces para tal efecto, mediante “acuerdo delegatorio”, según lo estipulado en los “considerandos” de dicha declaratoria.

(b) El segundo requisito es el de **razonabilidad**: no basta con que el ente obligado cite normativas que lo habiliten a denegar la información por considerarla reservada, también es necesario que se razone la adopción de una limitación y de fundamentar la clasificación

---

<sup>9</sup> Es importante destacar que recientemente este instituto se ha pronunciado sobre la misma declaratoria de reserva, en el caso bajo referencia NUE 114-A-2019; mismo que será citado el siguiente apartado.

de un documento [reguladas en el Art. 21 de la LAIP]; con ello se busca reducir la arbitrariedad de los funcionarios que tienen la potestad de clasificar la información<sup>10</sup>, y evitar denegaciones injustificadas al acceso.

Al respecto, es importante señalar que el requisito de razonabilidad no se agota con la simple argumentación sino que, como todo acto que emana de la Administración Pública, la motivación debe ser congruente, de no ser así, la reserva carece de sustento. De manera que, con relación a este requisito, la declaratoria de reserva estipula que este acto administrativo responde a la necesidad de salvaguardar la defensa nacional y la seguridad pública, según los siguientes argumentos:

“... las labores de inteligencia ejecutadas por el OIE están enfocadas en la recolección, evaluación y análisis de información útil, que tiene por objeto informar y asesorar al Presidente de la República en lo necesario para la satisfacción de los objetivos nacionales vinculados al desarrollo del país, la seguridad del Estado y la vigencia del régimen democrático referidas especialmente a todos los campos de la seguridad nacional. En ese orden de ideas, las actividades del OIE juegan un papel importante al efectuar actividades de inteligencia y contrainteligencia, ya que con la información obtenida buscan proteger el bien jurídico de la seguridad nacional. Consistente con lo antes dicho, dar a conocer las dependencias o unidades administrativas que conforman el OIE, los antecedentes, expedientes y datos de sus empleados, las actividades que en ella se desempeñan (sean operativas o de carácter administrativo) y los fondos de su financiamiento y su correspondiente gasto podrían ocasionar un perjuicio a la protección de la seguridad nacional que desempeña dicho ente estatal; pues su divulgación brindaría elementos que permitiría identificar o determinar, con mayor o menor certeza, las actividades de inteligencia y los sujetos que las realizan como parte de su quehacer institucional. De ahí que, en concordancia con el acto administrativo emitido por el IAIP, el OIE posee una naturaleza específica y especial frente a otras dependencias del Estado, ya que sus labores de inteligencia están protegidas – per se – por el deber de guardar secreto, pues para que sus labores de prevención y neutralización de posibles amenazas al país sean efectivas es importante brindar únicamente aquella información o datos que no comprometan el desarrollo exitoso de sus funciones. Por tales razonamientos, con base a la excepción contemplada en el Art. 19 letra “b” LAIP, resulta necesario reservar el expediente denominado “Organismo de Inteligencia del Estado” en cuanto que: (a) la reserva es idónea para la protección de intereses legítimos entendidos desde la perspectiva de la defensa nacional y la seguridad pública; (b) es justificada a partir de la necesidad de tutelar bienes jurídicos directamente vinculados a las actividades de inteligencia del Estado, cuya afectación es mínima

<sup>10</sup> Art. 28 del Reglamento de la LAIP.



para los particulares; y, (c) que dentro del examen de proporcionalidad de la medida – la limitación a la divulgación del acceso a la información frente al bien jurídico de la defensa nacional y la seguridad pública – es de menor envergadura frente a los posibles perjuicios que la entrega pudiera derivar a la protección de los intereses del Estado y de los particulares”.

De lo anterior, el ente obligado a través de dicha declaratoria hizo alusión al riesgo que corre la OIE de poner en peligro las actividades que desempeña, y una somera mención de la ponderación del derecho de acceso a la información Pública (DAIP) frente a los bienes jurídicos: seguridad pública y defensa nacional.

(c) Por último, el tercer requisito es el de **temporalidad**; es decir, que la reserva debe alegarse por un tiempo determinado. Esto es así debido a que la información reservada no deja de ser pública y, por lo tanto, al desaparecer la causal que le dio vida a la reserva es necesario que la información continúe con su difusión irrestricta. Para tal efecto, el Art. 20 de la LAIP establece el plazo de la reserva, señalado, en principio, que la información se puede mantener en tal carácter hasta por un periodo de siete años. En caso de no fijarse un plazo determinado o determinable, podría vulnerarse el DAIP al generar incertidumbre sobre el momento en que la información estará a disposición del público.

Este requisito implica, además, que los entes obligados **no pueden establecer restricciones indefinidas, atemporales (Art. 21 de la LAIP) o injustificadamente extensas, pues se anularía el contenido esencial del DAIP y afectaría severamente la seguridad jurídica**; consecuentemente, para determinar este límite temporal, deben valorarse elementos intrínsecamente relacionados a cada caso en concreto y realizarse un juicio de ponderación entre el DAIP y los legítimos intereses estatales y dentro de la periodicidad para reservar otorgada por la LAIP.

Sin embargo, en el caso en análisis, si bien la declaratoria de reserva cuenta con un plazo, la **PR** no emitió una declaratoria de reserva debidamente fundamentada en este requisito, **pues estableció un plazo de reserva para la información solicitada, de forma genérica**, sin sustentar de forma razonable el porqué del plazo de los siete años; es decir, las razones o la necesidad de excluir de conocimiento público la información solicitada por ese período de tiempo. El hecho de emitir declaratorias sin plazo de finalización o con un plazo máximo genera inseguridad jurídica, puesto que se dejaría a discreción de la administración

pública el desclasificar la información, estableciendo plazos máximos sin la debida justificación.

CC  
X  
fco  
Q

III. A. Determinado lo anterior, corresponde hacer mención del criterio resolutivo emitido por este Instituto, referente a la vigencia del Art. 8 de la LOIE, en la resolución definitiva del 13 de octubre de 2015, en el procedimiento del recurso de apelación de referencia NUE 71-A-2015; mismo que fue retomado en los procedimientos de apelación bajo referencia NUE 196-A-2018 y NUE 114-A-2019, conocidos posteriormente por este ente colegiado, a saber:

“En esa resolución, se señaló que el Art. 110 de la LAIP derogó todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que la contraríen, y únicamente dejó vigentes las que ahí menciona. Como puede advertirse de su lectura, el Art. 8 de la LOIE, que es una norma anterior a la vigencia de la LAIP, no se encuentra en dicho listado, de modo que a los fines de reservar una información relativa al OIE no basta con la invocación aislada de su ley, sino que debe hacerse conforme a lo regulado en la LAIP. Hacerlo de modo contrario implicaría apartarse de la LAIP, creando zonas exentas de su control y una restricción genérica, injustificada y arbitraria al DAIP.

Por consiguiente, la reserva de información relacionada con el OIE no debe fundamentarse de forma genérica conforme a lo establecido en el Art. 8 de la LOIE, sino que debe basarse en las excepciones establecidas en el Art. 19 de la LAIP, según cada caso en particular y en los principios rectores del acceso a la información”.

Por otro lado, la Sala de lo Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia, en las Sentencias de fechas 11-I-2013, 30-I-2013 y 1-IX-2016, pronunciadas en los procesos de Amp. 607-2010, 608-2010 y 713-2015, respectivamente–, **que el derecho a recibir información implica el libre acceso de todas las personas a las fuentes en las cuales se contienen datos de relevancia pública.** La protección constitucional de la búsqueda y obtención de información se proyecta básicamente frente a los poderes públicos –órganos del Estado, sus dependencias, instituciones autónomas, municipalidades– y a cualquier entidad, organismo o persona que administre recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de



la Administración en general, pues existe un principio general de publicidad y transparencia de la actuación del Estado y de la gestión de fondos públicos.

B. En ese sentido, este Instituto retoma lo señalado en la resolución del 12 de diciembre de 2019, en el procedimiento NUE 114-A-2019, que el acto administrativo declarativo de reserva que data del año 2015 – objeto del presente procedimiento – es genérico, pues según los motivos plasmados en dicho documento, el ente declara la reserva de *“toda la documentación relacionada a la OIE y que ingrese a dicho expediente administrativo”*, lo cual a la vez la convierte en una reserva absoluta. Si bien los entes obligados están facultados para reservar información, la cual se fundamenta por el daño que representaría la difusión de esta; la reserva declarada no puede hacerse de forma genérica, ya que eso violentaría el Principio de Máxima Publicidad y el DAIP en sí mismo.

El exigir que la reserva sea expresa tiene relación con el principio de seguridad jurídica y de legalidad de los artículos 2 y 86 de la Constitución, así como el principio de máxima publicidad del art. 4 literal a) de la LAIP, en el sentido que los ciudadanos sepan de antemano cuál información pública no se encuentra a disposición y el tiempo en el cual permanecerá restringida, debiendo los entes obligados detallar de forma clara y precisa el tipo de información que no se divulgará. El consignar en la declaratoria de reserva información genérica, vulneraría el derecho a la información pública de los ciudadanos, pues permitiría a las instituciones un amplio margen de actuación para restringir arbitrariamente los documentos que pueden ser de conocimiento público.

Por tanto, se ha acreditado que la reserva de información para el caso en concreto va en contra del derecho de acceso a la información pública, pues aunque la misma cumple con los requisitos de forma (relacionar legalidad, razonabilidad y temporalidad en el documento), el inconveniente en sí mismo recae en la razonabilidad, pues los motivos plasmados no son suficientes para acreditar el riesgo de revelar la mayoría de la información solicitada por el apelante. Y es que, como dicha información nunca ha sido publicada, la población en general (incluido este órgano colegiado) desconoce las actividades en sí que desempeña la OIE; por lo que resulta difícil establecer o hacer una ponderación del test del daño ante ambos bienes jurídicos con el derecho de acceso a la información pública, pues al no tener acceso a esa información, no se cuenta con parámetros de control reales o de referencia, lo cual repercute



en la contraloría ciudadana. Esta actividad, no puede dejarse a criterio discrecional del ente obligado, pues dicha actividad implicaría excluir al ente (este Instituto), que por ley está llamado a realizar esa actividad contralora sobre cualquier ente del Estado. CC

Asimismo, cabe recordar que la OIE, no deja de tener naturaleza pública, y que toda actividad del Estado, por regla general, debe estar sometida a la contraloría social. Este criterio, no es sostenido únicamente por este Instituto, sino que viene apoyado con la misma Ley del Organismo de Inteligencia del Estado, pues está reconocido en su artículo 3 que: “El Organismo de Inteligencia del Estado es un ente de carácter civil, profesional y apolítico **al servicio de la sociedad** y el Estado” (negrita fuera de texto). En esa misma línea, si el mismo Organismo reconoce estar al servicio de la sociedad, sería contradictorio afirmar ahora, que no se le permita a la sociedad ejercer control sobre un Organismo de esta naturaleza. Es decir, con esto no desconocemos que sea imperante que exista una regulación de los servicios de inteligencia del Estado, pero no puede dejarse todo lo relativo a estos como una “materia excluida”, pues el conocimiento del funcionamiento de tales servicios también es factor revelador del nivel democrático del funcionamiento estatal. Esta realidad nos permite afirmar que la finalidad de los servicios de inteligencia es su funcionamiento eficaz en aras de la defensa de la seguridad, pero también del orden democrático, pero esa eficacia no puede obtenerse a costa de hacer peligrar injustificadamente otros derechos, de lo cual debería realizarse un juicio de ponderación de derechos, explicando por qué le otorgó mayor valor a la reserva sobre el DAIP, lo cual no se ve reflejado en el documento de reserva que se ha examinado en este procedimiento. 40

C. Ahora bien, es de tomar en cuenta que este Instituto ya había conocido anteriormente sobre un caso de igual naturaleza, el cual se tramitó bajo la referencia **NUE 114-A-2019**, en donde la declaratoria de reserva que fue objeto de parámetro y análisis fue la misma que se discute en el presente procedimiento, es decir, la emitida a las quince horas del veinte de noviembre de dos mil quince, denominada: Organismo de Inteligencia del Estado. En dicha resolución, este instituto resolvió ordenar la entrega de la mayoría de la información solicitada en ese caso, a excepción de la relativa a: “la función u objetivo principal de cada unidad y las atribuciones/facultades que corresponden a cada una de ellas (de la OIE)”, pues de esta última se ordenó mantener la reserva.



En tal sentido, este Instituto advierte que la información solicitada en el caso NUE 114-A-2019 y la que es objeto del presente procedimiento, guarda cierta relación o conexión. Por lo tanto, este Instituto estima oportuno, conforme al principio *stare decisis* y a la sana crítica de los miembros que conforman este órgano colegiado, ceñirse al precedente del caso **NUE 114-A-2019** – en donde se adoptó el criterio mencionado anteriormente – de acuerdo al razonamiento siguiente:

**1) Copia del organigrama vigente del Organismo de Inteligencia del Estado OIE.**

Sobre este punto, en cuanto a entregar la estructura organizativa del OIE, tal como se ha mencionado, consideramos que no pone en riesgo ningún bien jurídico mencionado, pues resulta poco lógico pensar que a través del conocimiento de un organigrama general, se revelen las estrategias de inteligencia y contrainteligencia de una Institución, pues el ente se ha limitado a argumentar en abstracto el posible peligro que podría acarrear la revelación de tal información, no brindando elementos objetivos de cómo revelar tal información vulneraría la seguridad pública o la defensa nacional. En tal sentido, es procedente desclasificar y entregar la estructura organizativa del OIE, pues de conformidad con el Art. 10 numeral 2 de la LAIP, es información pública oficiosa.

Vale mencionar que este requerimiento fue también conocido en el caso NUE 114-A-2019, en donde también se ordenó desclasificar esa información y entregarla a la parte apelante.

**2) Detalle de los pagos asignados a los consultores contratados por la Unidad de Análisis Económico del OIE en concepto de honorarios profesionales.**

Respecto a este requerimiento, se estima que esta información no encaja en la reserva alegada, pues este requerimiento está relacionado al ámbito financiero de la OIE y tiene relación en sí mismo al caso NUE 196-A-2018, por lo que este Instituto se ciñe a este precedente para ordenar la entrega de esta información. A nuestro criterio, brindar el monto pagado a consultores en concepto de honorarios profesionales no pone en peligro la seguridad nacional o pública; es más, brinda la plena confianza a la población de que los fondos destinados a la OIE son realmente destinados para ese uso.

No obstante lo anterior, se advierte que el apelante no estipuló el período de tiempo al que obedece este requerimiento de información; por lo que durante la audiencia oral se le consultó que delimitara lo anterior, a lo cual, el ciudadano Burgos Viale se limitó a decir que lo solicitado obedece “al tiempo presente”. De manera que, conforme a la sana crítica de este ente colegiado, la información relativa a este requerimiento debe ser conforme al ejercicio fiscal actual; es decir, desde el 1 de enero de 2019 a la fecha de la solicitud de información (9 de julio de 2019). Lo anterior, en virtud que las contrataciones de bienes y servicios que efectúa la administración pública se hacen de manera anual y debido a que la contratación de servicios de consultoría recae en la categoría de contratación de “servicios profesionales”, puesto que si bien los consultores prestan sus servicios a la administración pública, ello no los convierte en empleados públicos; por lo que no pueden ser considerados servidores públicos *per se*. OC  
X  
fcs  
O

En tal sentido, podemos colegir que no se catalogan a los consultores contratados por el OIE como servidores públicos, incluso por un criterio de temporalidad, puesto que ellos no tienen una contratación permanente; sin embargo, no significa que dicha información no sea información pública, sino que debe entenderse en el sentido que dada la naturaleza de las funciones del OIE, al revelarse el nombre de los consultores existe un riesgo latente de poner en peligro su vida o su seguridad, pues podrían estar expuestos a circunstancias externas que busquen obtener información de este organismo a través de ellos. En ese sentido, dichos nombres no deben ser clasificados como información privada, pero sí encajan en la causal de reserva del Art. 19 letra “d”, lo cual implica que la información no deja ser pública, sino que únicamente se excluye del conocimiento general o público por un tiempo determinado y bajo supuestos concretos debidamente razonados. Por tanto, debe mantenerse la reserva sobre este punto, respetando siempre los criterios de legalidad, razonabilidad y temporalidad.

Lo anterior, Zanjado lo anterior, es importante aclarar que la entrega de información anteriormente relacionada debe obedecer a los datos generados y administrados por la **Presidencia de la República a la fecha de la solicitud de información** interpuesta por el apelante. Asimismo, es importante señalar que desde que el ente obligado denegó la información por estar clasificada como reservada – argumento ratificado el día de la



audiencia oral – esta se presupone que existe en los registros de ese ente obligado, por lo que no se puede alegar su inexistencia posterior.

D. Establecido lo anterior, este Instituto, como fiel garante del cumplimiento de la LAIP y del debido ejercicio del DAIP, considera oportuno establecer que, si bien es cierto, la información anteriormente relacionada es de carácter o naturaleza pública, tampoco sería pertinente desclasificar toda la información solicitada por los apelantes, tal como se detalló.

Así, tenemos que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado respecto de la labor encomendada al OIE, a saber: “...es pertinente señalar que la inteligencia del Estado es un campo sumamente amplio, las funciones que tradicionalmente se le asignan se enfocan en la inteligencia estratégica para la adecuada toma de decisiones políticas en ámbitos como la seguridad, la defensa y la integridad del territorio, de modo que sus campos de acción son tanto internos –inteligencia– como externo –contrainteligencia–. Su objetivo es defender los intereses del Estado frente a las amenazas que pongan en riesgo la paz, la seguridad y los derechos fundamentales”<sup>11</sup>.

Dicho de otra forma, las labores de inteligencia ejecutadas por el OIE, están enfocadas en la recolección, evaluación y análisis de información útil, que tiene por objeto informar y asesorar al Presidente de la República en lo necesario para la satisfacción de los objetivos nacionales vinculados al desarrollo del país, la seguridad del Estado y la vigencia del régimen democrático, referida especialmente a todos los campos de la seguridad nacional (Art. 3 de la LOIE). En ese sentido, las actividades del OIE juegan un papel importante al efectuar actividades de inteligencia y contrainteligencia<sup>12</sup>, ya que con la información obtenida buscan proteger el bien jurídico de la seguridad nacional.

En consecuencia, este Instituto estima que en relación al requerimiento consistente en: **“detalle de las funciones a cargo de la Unidad de Análisis Económico que forma parte del OIE”**, debe mantenerse la reserva de dicha información, pues a consideración de los suscritos, el revelar las funciones de estas unidades pertenecientes al OIE, sí se podría

---

<sup>11</sup> Sentencia de Amparo 636-2014 AC, Emitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador, a las nueve horas con cuarenta y un minutos del día veintiséis de febrero de dos mil dieciocho.

<sup>12</sup> Entendida como la labor de detectar, localizar y neutralizar acciones de inteligencia de otros países u organizaciones nacionales o extranjeras que puedan poner en peligro la seguridad, defensa y soberanía nacional.

impactar significativamente en la labor de inteligencia y contrainteligencia que realizan en pro de la seguridad pública y defensa nacional y en los planes estratégicos de la Institución <sup>B. C.</sup> para la consecución de sus objetivos.

Es decir, bajo esta lógica, es oportuno ordenar que la **PR** modifique la declaratoria de reserva que incluya los aspectos específicos relativos a su funcionamiento y actividades propias de la OIE, la cual debe ser realizada en atención a lo dispuesto en el art. 21 de la LAIP, atendiendo los requisitos de legalidad, razonabilidad y temporalidad, y con base a lo establecido en la presente resolución.

Lo anterior, responde a lo expuesto por el ente obligado, de que pretende proteger con la reserva de la información el expediente administrativo de la OIE, pues de la labor que desempeña este grupo selecto de servidores públicos en temas de seguridad pública y defensa nacional, tiene un beneficio palpable en la sociedad salvadoreña y se pondera esto sobre la difusión de esta información que podría repercutir negativamente en la ejecución de planes, proyectos o políticas sobre el tema.

En consecuencia, es oportuno ordenar a la **PR** que modifique la reserva de información y clasifique lo antes relacionado, que contemple los parámetros establecidos por este Instituto, con el fin de no entorpecer el debido ejercicio del DAIP ni las labores de seguridad pública y defensa nacional que este organismo realiza.

Finalmente, este Instituto estima que la población tiene derecho a ejercer contraloría social sobre el quehacer de las instituciones públicas en general o las privadas que ejecuten y/o administren recursos públicos, lo cual incluye al OIE (objeto del presente procedimiento), siempre que no implique de ninguna manera conocer aspectos que puedan poner en riesgo de forma clara la seguridad nacional, seguridad pública y otros bienes jurídicos protegidos, y no basar su reserva sobre suposiciones abstractas carentes de fundamento como las presentadas en el presente procedimiento. Lo anterior, prevaleciendo el principio de máxima publicidad de conformidad con el Art. 5 de la LAIP, al no enmarcarse en las excepciones a la publicidad de la información; por lo que debe brindarse la información solicitada en los términos establecidos en la presente resolución y valorar los argumentos técnicos esgrimidos en la presente. Consideramos oportuno que ante este pronunciamiento, se valore por el ente



obligado la prevalencia de los intereses de la ciudadanía y de su control democrático, para eliminar de manera voluntaria todo obstáculo al derecho de acceso a la información y pueda concretizarse en otorgar la información, sobre todo considerando que con el presente se esbozan argumentos de carácter técnico-jurídico para desclasificar la información.

E. Por último, en relación al requerimiento número 1 consistente en **“nombre oficial de los organismos de inteligencia que en la actualidad dependen del Presidente de la República por formar parte del órgano ejecutivo”**, este Instituto estima que, tal como lo ha acreditado el ente obligado, el único organismo de inteligencia oficial es el denominado por ley como “Organismo de Inteligencia del Estado” (OIE), de conformidad a la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado (LOIE); puesto que si bien hay otras instituciones que realizan labores de inteligencia, el OIE es el único que forma parte del Órgano Ejecutivo, lo cual también se colige del esquema de la estructura organizativa de la PR, el cual corre agregado al presente expediente a folio 48. En tal sentido, es procedente confirmar la resolución emitida por el entonces Oficial de Información respecto de este punto.

### **3. Decisión del caso:**

**Por tanto**, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los Arts. 6 y 18 de la Cn., 52 inciso 3º, 58 letras “b”, “d” y “g”, 94, 96 letra “d”, y 102 de la LAIP, este Instituto, **resuelve**:

a) **Modificar** la resolución emitida por el entonces Oficial de Información de la **Presidencia de la República** de fecha 1 de julio de 2019, que denegó la información relativa a: “i) copia del organigrama vigente del Organismo de Inteligencia del Estado OIE; ii) detalle de las funciones a cargo de la Unidad de Análisis Económico que forma parte del OIE; y, iii) nombre de los consultores contratados por la Unidad de Análisis Económico del OIE y iv) detalle de los pagos asignados a los mismos en concepto de honorarios profesionales”, por los motivos ya expuestos en la presente resolución.

b) **Confirmar** lo resuelto por el entonces Oficial de información en la resolución fecha 1 de julio de 2019, en relación al requerimiento consistente en: **“nombre oficial de los organismos de inteligencia que en la actualidad dependen del Presidente de la**

**República por formar parte del órgano ejecutivo**", por los motivos expuestos en la presente.

c) **Modificar** la declaratoria de reserva emitida el 20 de noviembre de 2015, en donde se decide reservar la información relativa al "expediente administrativo denominado Organismo de Inteligencia del Estado", por ser genérica y contraria al principio de máxima publicidad, según los términos establecidos en esta resolución.

d) **Ordenar** a la **Presidencia de la República**, por medio de su titular o el que este delegue, que en el plazo de **tres días hábiles**, contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, modifique la declaratoria de reserva emitida el 20 de noviembre de 2015, en donde se decide reservar la información relativa al "expediente administrativo denominado Organismo de Inteligencia del Estado", en el sentido de mantener la reserva sobre las funciones a cargo de la Unidad de Análisis Económico del Organismo de Inteligencia del Estado y el nombre de los consultores contratados por el OIE, de conformidad a lo dispuesto en la presente resolución, manteniendo el plazo designado o estipular uno más corto. Asimismo, que **desclasifique** la siguiente información: "i) copia del organigrama vigente del Organismo de Inteligencia del Estado OIE y ii) el detalle de los pagos asignados a los consultores contratados por la Unidad de Análisis Económico del OIE en concepto de honorarios profesionales".

e) **Ordenar** a la Oficial de Información de la **Presidencia de la República**, que en el plazo de **cinco días hábiles**, contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, **entregue** al ciudadano **José Roberto Burgos Viale**, la información consistente en: "i) copia del organigrama vigente del Organismo de Inteligencia del Estado OIE y ii) el detalle de los pagos asignados a los consultores contratados por la Unidad de Análisis Económico del OIE en concepto de honorarios profesionales", en los términos ya expuestos en la presente resolución. Es importante aclarar que la entrega de información anteriormente relacionada debe obedecer a los datos generados y administrados por la **Presidencia de la República a la fecha de la solicitud de información** interpuesta por el apelante.

f) **Requerir** a la **Presidencia de la República** que en el plazo de **veinticuatro horas**, luego de fenecidos los plazos estipulados en las letras d) y e) de esta parte resolutive, remita



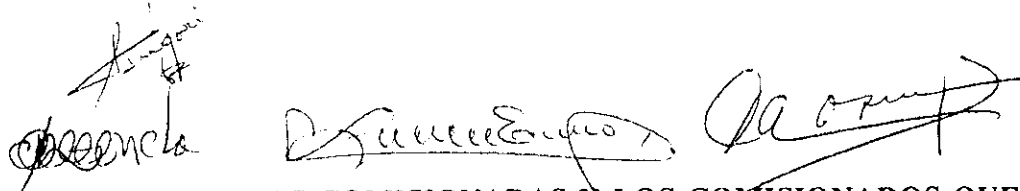
a este Instituto el informe de cumplimiento de la presente resolución. Este informe también podrá ser remitido vía electrónica a la dirección [oficialreceptor@iaip.gob.sv](mailto:oficialreceptor@iaip.gob.sv).

**g) Hacer saber a las partes**, que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede, pues con esta resolución queda agotada la vía administrativa de conformidad al Art. 131 de la LPA, quedando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

**h) Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para que verifique el cumplimiento de la misma.

**i) Publicar** esta resolución oportunamente.

*Notifíquese.-*



**PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN**

#### **VOTO RAZONADO DE LA COMISIONADA OLGA NOEMY CHACÓN DE HERNÁNDEZ**

Con respecto al numeral 3 de la petición de información consistente en “**Detalle de las funciones a cargo de la Unidad de Análisis Económico que forma parte del OIE**”, solicitada por el ciudadano Burgos Viale, no acompañare con mi voto al resto de comisionados por considerar que la respectiva petición de información debe ser pública, ya que en ningún momento está solicitando información contemplada en el artículo 19 de la LAIP y dichas causales no aplican para este caso.

A través de la información solicitada, el ciudadano pretende hacer contraloría ciudadana sobre los recursos asignados al OIE, y de esa manera prevenir prácticas poco transparentes en la administración de los fondos públicos. Procesos judiciales de todos



conocidos, han evidenciado el mal uso de los fondos públicos en gobiernos pasados, como ha ocurrido en la administración del ex presidente Elías Antonio Saca y sendos procesos de investigación en marcha contra el también expresidente Mauricio Funes Cartagena. El conocer las funciones de la Unidad de Análisis económico permitiría conocer cómo se distribuyen los fondos, cuales son las prioridades, en términos generales los grandes rubros, sin entrar en detalles de la distribución de cada partida.

Todas las entidades que manejan y administran fondos públicos están obligadas a explicar a la ciudadanía su uso y destino y en el caso de la OIE no es la excepción, perfectamente puede entregar una versión pública del detalle de las funciones a cargo de la Unidad de Análisis Económico que forma parte del OIE, y con ello dar plena vigencia al principio de máxima publicidad contemplado en el artículo 4 de la LAIP, y permitir a la ciudadanía hacer procesos de contraloría social y de esa hacer prevalecer otros derechos. Así mi voto.



**PRONUNCIADO POR LA COMISIONADA QUE LO SUSCRIBE**



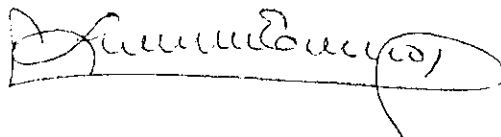
**VOTO RAZONADO DE LA COMISIONADA CLAUDIA LIDUVINA  
ESCOBAR CAMPOS**

Con respecto al numeral 4 de la petición de información consistente en “**Nombre de los consultores contratados por la Unidad de Análisis Económico del OIE**”, solicitada por el ciudadano Burgos Viale, no acompañaré con mi voto al resto de comisionados por considerar que la respectiva petición de información debe ser entregada, puesto que si bien no forman parte del personal interno de la OIE, estos sí prestan un servicio al Estado, y en consecuencia, la remuneración que reciben es pagada con fondos públicos.

En tal sentido, considero que sí es de interés público conocer el nombre de los mismos, puesto que de no revelarse este dato, ello podría dar lugar al desvío de fondos

públicos bajo la figura de “pago de consultorías”. Aunado a lo anterior, dichos consultores son personas externas al OIE, por lo que no le veo ningún riesgo al revelar la misma y por consiguiente, no cabe la reserva bajo ninguno de los supuestos del Artículo 19 de la LAIP. Por tanto, en virtud del Principio de Máxima Publicidad regulado en el Art. 4 letra “a”, esta información debió ser entregada.

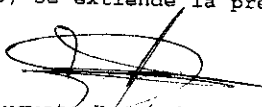
Así mi voto.



**PRONUNCIADO POR LA COMISIONADA QUE LO SUSCRIBE**

JH/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los doce días del mes de febrero de dos mil veinte.

  
José Augusto Hernández Funes  
NOTIFICADOR  
IAIP

